

Foja: 1

NOMENCLATURA : 1. [40] Sentencia
JUZGADO : 2º Juzgado Civil de Chillán
CAUSA ROL : C-289-2023
CARATULADO : ROMERO/FISCO DE CHILE (C.D.E)

Chillán, dieciséis de Agosto de dos mil veintitrés.

VISTOS:

A folio 1, comparece don Juan Pablo Gallardo Parada, abogado, en representación de don Juan de Dios Romero Jara, jubilado, domiciliado en calle Vía Láctea 2921, departamento 16, comuna de Maipú e interpone demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual en contra del Estado, persona jurídica de derecho público, representada por el Consejo de Defensa del Estado, a través de su Abogado Procurador Fiscal, doña Mariella Ximena Paulina Dentone Salgado o quien la reemplace o subrogue legalmente, todos con domicilio en 18 de Septiembre N° 329, Chillán. Funda la demanda en haber sometido a su representado a detención y prisión arbitraria e ilegal, torturas y apremios físicos y síquicos, cuyas consecuencias permanecen hasta el presente. Indica que, al ejecutar tales actos el Estado de Chile incumplió sus propias leyes y los convenios internacionales que protegen el derecho de las personas, provocando un daño de tal entidad, que pueden en parte ser reparados por la condena al pago de indemnización de perjuicios. Señala que 11 de septiembre de 1973, un grupo importante de militares y civiles, se hicieron del poder en Chile, mediante el uso de la fuerza, derrocando al presidente electo, con el objeto de “restablecer la chilenidad justicia y la institucionalidad quebrantada” para que “se respetara la Constitución y las leyes de la República en la medida en que la actual situación de país lo permita” (D.L N° 1). Refiere que, en los hechos lamentablemente ninguno de esos propósitos se cumplieron a cabalidad, dado que el 17 de diciembre de 1974, el Presidente de la Junta se auto proclamó por Decreto Presidente de la República y a la Junta se le dieron atribuciones legislativas, se declaró en receso a los partidos políticos, iniciando una persecución masiva a los militantes y simpatizantes del sector de izquierda en todo el país, para lo que se utilizaron los recintos militares y policiales como centros de detención, se aplicó torturas y en definitiva se buscó la eliminación sistemática de los adversarios políticos.

Señala que, según versión de la víctima: *“Para el año 1973, yo estudiaba en la Universidad Técnica del Estado, sede Chillán, era dirigente estudiantil. Para el día 11 de septiembre del año 73, fui arrestado en la casa de un compañero, en la tarde de día llegó un contingente de 8 a 10 Carabineros, allanaron violentamente la casa, rompiendo todo, nos golpearon ahí mismo, el miedo me bloqueó, tengo como fotos, de ver golpes de culata, gritos, insultos, nos tiraron arriba de un furgón, en el suelo.*



Foja: 1

En la comisaría nos pusieron algo en la cabeza, para que no viéramos, era como casco, o un balde, luego nos hacían correr unos con otros, y chocar con las paredes, para que nos golpeáramos, se reían, insultaban, luego me metieron un tiempo a un calabozo.

Al otro día, sin comer ni tomar agua, me llevaron a la Cárcel de Chillán, ahí estuve 9 meses preso. Recuerdo en 3 oportunidades me llevaron al regimiento de Chillán.

Nos sacaban en la mañana, teníamos que esperar el regimiento, hasta que nos tocara nuestro turno para que nos torturaran, la espera era difícil, porque escuchábamos las torturas de los otros, y sabíamos que nos tocaría.

Las tres veces me torturaron con golpes, me amarraban a una silla, y me pusieron electricidad, en distintas partes, luego me golpeaban, me amarraron a una silla, me caí de espalda de un combo en la cara, y del pelo y orejas me tomaron para pararme de nuevo, ahí ya como que ya no me dolía, los veía de lejos, me preguntaban por nombres, armas, pero no entendía bien que me preguntaban, de haber sabido la respuesta, no hubiera podido responder, porque estaba como paralizado.

Después de eso, nos tiraban a un hoyo profundo, amarrados, ahí nos pegábamos en todos lados, como cayéramos, me fracturé un pie, me lo hice pedazos, en la cárcel no recibí medicamentos, perdí todas las uñas del pie, con el pie así, igual me sacaron para torturarme de nuevo.

Quedé con sordera producto de la corriente, con el pie deforme, y desde ahí, al tiempo comencé con problemas para caminar bien.

Perdí mis estudios, después no me aceptaron en la Universidad.

Cuando salí me relegaron a Angol, y luego me detuvieron varias veces más, casi no pude salir de Bulnes por varios años más, me vigilaban, y cualquier cosa que pasara, sabía que me irían a buscar”.

Indica que, su representado, desde septiembre de 1973 fue sometido a distintas detenciones y torturas en el contexto de interrogaciones y persecuciones por parte de personal militar, que dejaron un rastro indeleble hasta la fecha; además se vio obligado a abandonar el territorio nacional.

Agrega que, los hechos descritos se encuentran reconocidos por el Estado de Chile, según consta en el informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Comisión Valech) del Estado de Chile. Figurando su representado en la lista de víctimas reconocidas por dicha comisión bajo el número 21.563. Además del programa de reparación PRAIS, dependiente del Ministerio de Salud de Chile.



Foja: 1

Sostiene que todo lo anterior dejó serias secuelas físicas y síquicas, las que son irreversibles.

Agrega que, el 11 de noviembre de 2003 se crea mediante Decreto Supremo N° 1040 la “Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura” cuyo “objeto exclusivo (es) determinar, de acuerdo a los antecedentes que se presenten, quienes son las personas que sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas, por actos de agentes del Estado o de personas a su servicio, en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y 10 de marzo de 1990, se establece además que la Comisión deberá Proponer al Presidente de la República las condiciones, características, formas y modos de las medidas de reparación, austeras y simbólicas que podrán otorgarse a las personas que, reconocidas como prisioneros políticos o torturados, no hubieren recibido a la fecha otro beneficio de carácter reparatorio derivado de tal calidad”.

Refiere que, después de treinta años de ocurridos los hechos, el Estado determinó la condición de víctima de prisión política y tortura a través de un “riguroso proceso de análisis que comprendió la validación de la información proporcionada por los declarantes por medio de investigación documental, antecedentes provenientes de organismos públicos, referencias de organismos de derechos humanos, de organizaciones de víctimas, información de testigos calificados e investigaciones en bases de datos disponibles”. Dicho informe determinó un universo de 27.255 víctimas; siendo reconocido por dicha comisión bajo el número 21.563.

Señala que, los actos ilícitos que los agentes del Estado cometieron y causaron con ello el daño relatado por el actor, fueron ejecutados desde el año 1973, año en que fue víctima de las torturas ya descritas y, luego continuó una persecución durante todo el régimen militar.

Indica que, hasta el año 1980 rigió en nuestro país la Constitución de 1925, norma fundamental que fue severamente trasgredida por los Gobernantes de la época. Se vulneraron los artículos 13 según el cual “Nadie puede ser detenido sino por orden de funcionario público expresamente facultado por la Ley y después que dicha orden sea intimada en forma legal, a menos de ser sorprendido en delito fragante, en este caso, para el único objeto de ser conducido ante Juez competente”; artículo 14 que dispone “Nadie puede ser detenido, sujeto a prisión preventiva o preso sino en su casa o en lugares públicos destinados a este objeto”; también se vulneró el artículo 15 que establecía “Si la autoridad hiciere detener a alguna persona, deberá, dentro las 48 horas siguientes, dar aviso al Juez competente poniendo a su disposición al detenido”; artículo 18 inciso segundo según el cual “No podrá aplicarse tormento, ni imponerse en caso alguno, la pena de confiscación de bienes, sin perjuicio del comiso en los casos establecidos por las leyes”; finalmente se argumenta que el gobierno de facto tenía las facultades para decretar los estados de excepción que la misma constitución franquea a



Foja: 1

los Presidentes en el artículo 72 número 17, pero con las limitaciones que le impone el artículo 44 número 13 que disponía “Solo en virtud de una Ley se puede... N°13 Restringir la libertad personal y la de imprenta, suspender o restringir el ejercicio del derecho a reunión, cuando la reclamare la necesidad imperiosa de la defensa del Estado, de la conservación del régimen constitucional o de la paz interior, y solo por períodos que no podrá exceder de seis meses. Si estas leyes señalaren penas, su aplicación se hará siempre por los tribunales establecidos, Fuera de los casos prescritos en este número, ninguna Ley podrá dictarse para suspender o restringir las libertades o derechos que la Constitución asegura”.

Indica que, la trasgresión de la legislación internacional que el Estado de Chile ha suscrito y se ha obligado a cumplir en materia de protección de los derechos humanos, le valió la condena internacional y el nombramiento de un relator especial de las Naciones Unidas, de carácter casi permanente que informaba a la comunidad de las naciones, la evolución de la situación de los derechos humanos en Chile.

Sostiene que, en Chile a la fecha de los hechos relatados, se violaron las disposiciones de la Declaración Universal de los DDHH, especialmente el artículo 3 “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de si persona”; artículo 5 que dispone “Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”; artículo 8 que establece “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violan sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la Ley” y el artículo 9 según el cual “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado”. Y así también se vulneró el Pacto de San José artículos 5, sobre derecho a la integridad personal, 7, números 1 y 2 referentes al derecho a la libertad en todos sus números (sic).

Agrega que, para el cumplimiento de las disposiciones por los Estado partes, se establece una comisión que recibe las denuncias y las tramita y propone una solución amistosa, si el Estado denunciado no las acoge, el afectado puede ocurrir a la Corte Interamericana en un plazo de tres meses. El artículo 63 dispone “Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos por esta convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su Derecho o Libertad conculcado. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”.

Señala que, la presente demanda se asila también en la actual Constitución, artículo 5 inciso segundo, la que reconoce la primacía de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana por sobre la soberanía del Estado, que éste no solo debe respetar estos derechos, sino también promoverlos. Dichos derechos se encuentra garantizados en la actual Constitución como también en los tratados internacionales. En



Foja: 1

consecuencia, sostiene que esta vulneración de derechos deben ser investigados, sancionados y reparado el daño causado, de otra manera se estará incumpliendo el mandato Constitucional. En la misma línea, indica que el artículo 38 inciso segundo de la Constitución Política establece que cualquier persona lesionada en sus derechos por la acción del Estado o sus organismos puede reclamar ante los tribunales que determine la Ley. Si la posibilidad de ocurrir, reclamando la responsabilidad del Estado, le está dada a los ciudadanos por cualquier derecho transgredido, con mayor razón le asiste a los actores, se trata de vulneración de derechos esenciales.

En síntesis, invoca la responsabilidad civil del Estado, toda vez que sus agentes premunidos de la fuerza coactiva que éste les entregó cometieron actos delictuales, transgrediendo la normativa referida, transcribe jurisprudencia referente al tema.

Finalmente, señala que en ese orden de ideas, la responsabilidad civil del Estado, se verifica y concretiza mediante el concepto de falta de servicio, al cual resulta aplicable también las normas de derecho común en cuanto no sean incompatibles con aquel estatuto jurídico, entre ellas las contenidas en los artículo 2314 y siguientes del Código Civil, sobre responsabilidad extracontractual.

Solicita tener por interpuesta demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad civil extracontractual del Estado, representado por el Consejo de Defensa del Estado, por daño moral y, en concreto se le condene a pagar a don Juan de Dios Romero Jara la suma de \$300.000.000 por concepto de daño moral; en subsidio, las sumas menores que el Tribunal determine conforme al mérito del proceso, con costas, reajustes e intereses corrientes desde la fecha de la dictación de la sentencia o, en subsidio, con reajustes e intereses que el Tribunal determine conforme a derecho.

A folio 6 se notificó la demanda al demandado.

A folio 7, doña Mariella Dentone Salgado, Abogado Procurador Fiscal de Chillán, en representación del Fisco de Chile, contesta la demanda señalando, luego de un recuento de lo expuesto en la demanda, que no resulta posible comprender el régimen jurídico del tipo de reparaciones por infracciones a los Derechos Humanos si no se posicionan correctamente estas indemnizaciones en el panorama jurídico nacional e internacional. Refiere que dicha comprensión solo puede efectuarse al interior y desde el ámbito de la “Justicia Transicional”. Indica que no hay que olvidar que, desde la perspectiva de las víctimas, la reparación de los daños sufridos juega un rol protagónico en el reconocimiento de aquella medida de justicia por tantos años buscada; el éxito de los procesos penales se concentra solo en el castigo a los culpables no preocupándose del bienestar de las víctimas. En dicho sentido, las negociaciones entre el Estado y las víctimas revelan que tras toda reparación existe una compleja decisión de mover recursos económicos públicos, desde la satisfacción de un tipo de necesidades públicas a la



Foja: 1

satisfacción de otras radicadas en grupos humanos más específicos. Este concurso de intereses se une en los programas propuestos por las Comisiones de Verdad y Reconciliación, dicho programas, en efecto, incluyen beneficios educacionales, de salud, gestos simbólicos u otras medidas análogas diversas a la simple entrega de cantidades de dinero. Indica que, no es un secreto que las transiciones han estado, en todos los países que las han llevado a cabo, basadas en complejas negociaciones, para ello basta revisar someramente las discusiones originadas en la aprobación de la ley N° 19.123 para darse cuenta del cúmulo de sensibilidades e intereses en juego en ella; muchas de esas negociaciones privilegian a algunos grupos en desmedro de otros cuyo intereses se estiman más lejanos, se compensen algunos daños y se excluyen otros o se fijan legalmente, luego de un consenso público, montos, medios de pago o medidas de daño. En lo relacionado con el segundo objetivo, la llamada Comisión Verdad y Reconciliación o Comisión Retting, en su informe final planteó una serie de “propuestas de reparación” entre las cuales se encontraba una “pensión única de reparación para los familiares directos de las víctimas” y algunas prestaciones de salud. El informe sirvió de causa y justificación al proyecto de ley que el Presidente de la República envió al Congreso y que luego derivaría en la Ley N° 19.123, que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación.

Indica que, la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se ha realizado parcialmente a través de tres tipos de compensaciones: a) reparaciones mediante transferencias directas de dinero; b) reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas y; c) reparaciones simbólicas. En cuanto a la reparación mediante transferencia directa de dinero, señala que diversas han sido las leyes que han establecido dicho tipo de reparaciones, incluyendo también a las personas que fueron víctimas de apremios ilegítimos. Luego individualiza parte de las prestaciones otorgadas y en cuanto a las reparaciones simbólicas, señala que se realizan a través de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones.

Así las cosas, sostiene que, tanto la indemnización que se solicita, como el cúmulo de reparaciones indicadas, pretenden compensar el daño ocasionado por los mismos hechos; por lo que, los referidos mecanismos de reparación han compensado precisamente aquellos daños no pudiendo, ser exigidos nuevamente, cita jurisprudencia y doctrina al respecto.

Señala que, estando la acción interpuesta en autos basada en los mismos hechos y pretendiendo indemnizar los daños que han inspirado precisamente el cúmulo de acciones reparatorias, opone la excepción de reparación satisfactiva por haber sido ya indemnizada la parte demandante.



Foja: 1

En subsidio, opone excepción de prescripción extintiva de las acciones, la que funda en lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, en relación al artículo 2497 del mismo cuerpo legal, por lo que solicita se rechace la demanda en todas sus partes. Indica que según el relato fáctico del actor, la detención ilegal, prisión política y tortura que sufrió, ocurrió a partir del 11 de septiembre de 1973 y se extendió por aproximadamente nueve meses. Siendo del caso que, entendiéndose suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las propias víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el 10 de febrero de 2023, igualmente ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2.332 del Código Civil; por lo que opone la excepción de prescripción de 4 años establecida en el artículo 2332 del Código Civil, pidiendo que sea acogida y se rechace íntegramente la acción indemnizatoria deducida como consecuencia de ello, por encontrarse prescrita.

En subsidio, en caso que el Tribunal estime que la norma anterior no es aplicable al caso de autos, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2515 en relación al artículo 2514 ambos del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la fecha de notificación de la demanda, transcurrió con creces el plazo que establece el citado artículo 2515 del Código Civil.

En cuanto al contenido patrimonial de la acción indemnizatoria, indica que la indemnización de perjuicios, cualquiera sea el origen o naturaleza de los mismos, no tiene un carácter sancionatorio, de modo que jamás ha de cumplir un rol punitivo para el obligado al pago y su contenido es netamente patrimonial; de allí que la acción destinada a exigirla, esté como toda acción patrimonial expuesta a extinguirse por prescripción.

Luego, en subsidio de las defensas y alegaciones vertidas, se refiere a la naturaleza de la indemnización solicitada y al monto pretendido. En relación al daño moral hace presente que dependerá de las secuelas sufridas con motivos de los hechos objeto de la demanda y de conformidad a los antecedentes que obren en la etapa probatoria.

En subsidio de las precedentes alegaciones, indica que la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos del Estado y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales, alega que en todo caso, en la fijación del daño moral por los hechos de autos, se debe considerar todos los pagos recibidos a través de los años por el demandante de parte del Estado conforme a las leyes de reparación (19.123, 19.234, 19.992, sus modificaciones y demás normas pertinentes) y que seguirá percibiendo a título de pensión, también los beneficios extra patrimoniales que dichos



Foja: 1

cuerpos legales contemplan, pues todos ellos tuvieron por objeto reparar el daño moral. De no accederse a la petición subsidiaria implicaría un doble pago por un mismo hecho, lo cual contraría los principios jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces. Hace presente que para la regulación y fijación del daño moral debe considerarse como un parámetro válido los montos establecidos en las sentencias de tribunales en esta materia.

En cuanto al pago de intereses, hace presente que los reajustes solo pueden devengarse en el caso de que la sentencia que se dicte en la causa acoja la demanda y establezca esa obligación y además, desde que dicha sentencia se encuentre firme o ejecutoriada. A la fecha de interposición de la demanda de autos a tramitación o de su notificación y mientras no exista sentencia firme o ejecutoriada, ninguna obligación tiene su parte de indemnizar y, por tanto, no existe ninguna suma que deba reajustarse. Ello implica que en casos como el de autos, los reajustes que procedieren de ninguna manera podrían contabilizarse desde una fecha anterior a aquella en que la sentencia que los concede se encuentre firme o ejecutoriada. Indica que, el reajuste es un mecanismo económico financiero que tiene por objeto neutralizar el efecto que los procesos inflacionarios o deflacionarios tiene sobre la moneda de curso legal. Desde dicha perspectiva, no procede aplicar la corrección monetaria a partir de la fecha anterior a la determinación del monto respectivo por sentencia ejecutoriada.

Respecto de los intereses, señala que el artículo 1551 del Código Civil establece expresamente que el deudor no está en mora sino, cuando ha sido judicialmente reconvenido y ha retardado el cumplimiento de la sentencia. Agrega que, la jurisprudencia de los Tribunales Superiores así lo ha decidido de manera uniforme. Así, en el caso hipotético que se decida acoger la acción de autos y se condene a su parte al pago de una indemnización de perjuicios, tales reajustes e intereses solo podrán devengarse desde que la sentencia condenatoria se encuentre firme o ejecutoriada y su representado incurra en mora.

Solicita rechazar la demanda en todas sus partes, con costas.

A folio 11, el actor evacuó el trámite de réplica.

A folio 13, el Consejo de Defensa del Estado evacuó la dúplica.

A folio 19 se recibió la causa a prueba, fijándose como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos: 1) Efectividad que el demandante fue detenido el 11 de septiembre de 1973 por razones ideológicas; período durante el cual se mantuvo dicha privación de libertad; 2) Efectividad que durante el tiempo de privación de libertad el actor fue sometido a malos tratos psíquicos y físicos; 3) Efectividad que luego de recuperar su libertad se impidió al actor retomar sus estudios y además fue objeto de seguimientos y hostigamientos por parte de agentes del Estado; 4) En la asertiva de lo



Foja: 1

anterior, naturaleza del daño y cuantía, o parámetros que permitan su estimación pecuniaria; 5) Efectividad de haber indemnizado el Fisco de Chile al actor los daños que reclama en autos; 6) Efectividad de encontrarse prescrita la acción interpuesta por el demandante.

A folio 40, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que don Juan Pablo Gallardo Parada en representación de don Juan de Dios Romero Jara, deduce demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, fundado en la privación de libertad, torturas y persecución sufridas por el señor Romero a partir de 11 septiembre de 1973, ocasionadas por personal de Carabineros en el contexto de la situación vivida en Chile a partir del 11 de septiembre de 1973. Refiere que su representado fue reconocido como víctima por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura bajo el N° 21.563. Solicita condenar al demandado al pago de una indemnización ascendente a \$ 300.000.000 por concepto de daño moral, con costas.

SEGUNDO: Que contestando la demanda el Fisco de Chile sostiene que el actor recibe diversos beneficios por parte del Estado en el marco del programa de reparación canalizado entre otras mediante las leyes 19.123, 19.992, 19980 y 20874, por lo que debe entenderse que el daño cuya indemnización se pretende se encuentra reparado. En subsidio interpone excepción de prescripción extintiva, señalando que los hechos a que se refiere el actor ocurrieron a partir de 11 de septiembre de 1973, por lo que entendiendo que fue posible el ejercicio de acciones para perseguir la responsabilidad del Estado desde el restablecimiento de la democracia, a la época de la notificación de la demanda trascurrió en exceso el plazo previsto en el artículo 2332 del Código Civil, e igualmente aquel que se refiere el artículo 2515 del mismo cuerpo legal. Luego sostiene que la indemnización por daño moral no tiene carácter sancionatorio, y que ella pretende otorgar a la víctima una satisfacción o auxilio para atenuar el daño, por lo que la suma pretendida es excesiva. Por último señala que para el caso de condenar a su parte el pago de intereses y reajustes solo procede desde que la sentencia se encuentre firme y ejecutoriada y su parte incurra en mora.

TERCERO: Que se recibió la causa a prueba y se fijaron como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos: 1) Efectividad que el demandante fue detenido el 11 de septiembre de 1973 por razones ideológicas; período durante el cual se mantuvo dicha privación de libertad; 2) Efectividad que durante el tiempo de privación de libertad el actor fue sometido a malos tratos psíquicos y físicos; 3) Efectividad que luego de recuperar su libertad se impidió al actor retomar sus estudios y además fue objeto de seguimientos y hostigamientos por parte de agentes del Estado; 4) En la asertiva de lo anterior, naturaleza del daño y cuantía, o parámetros que permitan su estimación



Foja: 1

pecuniaria; 5) Efectividad de haber indemnizado el Fisco de Chile al actor los daños que reclama en autos; 6) Efectividad de encontrarse prescrita la acción interpuesta por el demandante.

CUARTO: Que, los demandantes acompañaron legalmente y sin objeción la siguiente documental:

-Copia de nómina de personas reconocidas como víctimas, emitido por la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura.

-Copia de sentencia pronunciada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en causa “Órdenes Guerra y otros con Chile, fondo y reparaciones” de 29 de noviembre de 2018.

-Copia de carpeta de antecedentes formada respecto de don Juan de Dios Romero Jara, extendida por el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

QUINTO: Que, el demandante rindió testimonial, habiendo presentado a los siguientes testigos legalmente interrogados y sin tacha:

Don Jorge Napoleón Hidalgo Oñate, Cédula Nacional de Identidad N° 6.963.866-K, jubilado, domiciliado en pasaje Rapa Nui N° 870, Bulnes quien preguntado respecto del hecho N° 1 de la resolución que recibió la causa a prueba señala “efectivamente Juan Romero fue detenido el mismo día 11 de septiembre en la tarde. La verdad es que ellos estaban en la casa de un amigo en la calle Serrano, luego fueron llevados a la Comisaría de Bulnes y en el caso de Juan Romero lo pasaron a la cárcel de Chillán. Lo que yo se es que en la cárcel de Chillán lo sacaban cada cierto tiempo al regimiento de Chillán con el fin de torturarlo y violar los derechos humanos y luego retornar a la cárcel. Lo que yo puedo afirmar es que este muchacho estuvo como 9 ó 10 meses en las cárceles de Chillán y todas esas sesiones de tortura y de golpes de electricidad se repetían todas las semanas, torturas en general.” Repreguntado “si los que lo detuvieron al señor Romero fue un grupo de Carabineros, ellos allanaron la casa, destruyeron, golpearon y después se llevaron a los detenidos a la tercera Comisaría de Bulnes. Juan estaba en la Universidad Técnica del Estado, era dirigente estudiantil y dirigente del MAPU.”

Respecto al hecho N° 2 de la resolución que recibió la causa a prueba señala “efectivamente la gente que pasaba por la Comisaría de Bulnes, por el regimiento de Chillán, eran sometidos a todo tipo de torturas. En el caso de Juan Romero Jara, recibió muchos golpes, culatazos, golpes de puño, golpes de palo, electricidad y apremios psicológicos, con el ánimo de ir disminuyendo sus capacidades.” Repreguntado “en el caso de la tercera Comisaría de Bulnes, aquí claramente fueron los Carabineros y en el caso del Regimiento R 9 de Chillán, fueron los militares y en el intermedio entre la cárcel de Chillán y el Regimiento sobre todo lo que dice aplicación de electricidad,



Foja: 1

fueron los funcionarios de la DINA y del SICAR, que era el servicio de inteligencia de Carabineros.”

Respecto del hecho N° 3 de la resolución que recibió la causa a prueba señala “si efectivamente, en las universidades se habían hecho listas, para que algunos estudiantes no volvieron a estudiar y en el caso de Juan Romero, nunca volvió a estudiar porque estaba en la nómina de alumnos objetados, por el sistema y efectivamente después, era objeto de seguimiento por parte de Carabineros y la policía secreta.” Repreguntado “Juan Romero estuvo 9 meses detenido en la cárcel de Chillán, después estuvo unos meses en la cárcel de Bulnes y después finalmente fue relegado por un año a la ciudad de Ángol. La relegación es un acto administrativo donde al ciudadano se le deja en un punto de la ciudad y él debe ver los alojamientos, comida y su estadía por un año, además debe firmar en esa época todos los días en la Comisaría más cercana. Juan Romero posterior a su detención y relegación sufrió acoso y persecución por parte de agentes del Estado. Habitualmente era perseguido por Carabineros de civil, por gente de la DINA y otros elementos más, a tal extremo que tuvo que irse de Bulnes.”

Sobre el hecho N° 4 de la resolución que recibió la causa a prueba señaló “cuando una persona es sometida a persecución, torturas, a relegación, es difícil cuantificar los montos, sobretodo considerando que en el caso de Juan Romero fácilmente perdió 4 años de su vida en detenciones, traslados, relegación, etc. Si hubiere que dar un monto actualmente toda esta experiencia se podría resumir en unos \$ 200.000.000 de pesos, considerando que hasta el día de hoy hay secuelas físicas y psicológicas.” Repreguntado “Juan Romero, era un cabro super nervioso, la tortura agravó así su sistema nervioso, tenía dificultades para hablar, para expresarse y una baja autoestima. En la parte física, también tenía problemas de movilidad y eso más adelante le causó un problema cardiocerebral, en resumen Juan Romero nunca pudo superar las secuelas de la tortura, tanto en la parte física, psicológica, y emocional. Efectivamente al día de hoy todas las secuelas físicas, psicológicas y emocionales subsisten.”

Don Nabor Claudio Hidalgo Oñate, Cédula Nacional de Identidad N° 5.909.901-9, jubilado, domiciliado en pasaje Rapa Nui N° 842, Bulnes, quien preguntado sobre el hecho N° 1 de la resolución que recibió la causa a prueba señala “si efectivamente fue detenido durante el año 1973. Entiendo que fue detenido en septiembre y estuvo preso en cárcel de Bulnes algunos meses, no recuerdo pero que menos de 3 meses y después trasladado al Regimiento Chillán, ahí estuvo preso. Las detenciones fueron todas violentas, agresivas, humillantes, por parte de Carabineros cuando lo detuvieron.” Repreguntado “la detención fue hecha por Carabineros de Bulnes, por un sub oficial Juan Cifuentes, siempre eran 8 ó 10 y acompañados por militares. Él fue detenido en la cárcel de Bulnes y más o menos tres meses y luego derivado al regimiento de Chillán, donde allí sufrió los peores maltratos, castigo severo, le tapaban la cabeza con una bolsa,



Foja: 1

lo golpeaban, la tortura que los sacaban a media noche que los iban a fusilar. Aproximadamente como 10 meses estuvo detenido en Chillán en el regimiento. También fue relegado este joven, estuvo en Angol como un año. El quedó muy mal, físicamente, psicológicamente. Él estudiaba en la Universidad Técnica del Estado en Chillán, y por supuesto que perdió la carrera. Si era simpatizante o participante del MAPU y también dirigente estudiantil.”

Respecto al hecho N° 2 de la resolución que recibió la causa a prueba señaló “si efectivamente, tortura física y psicológica, aplicación de golpes de corriente eléctrica en las partes más sensibles del ser humano, órganos sexuales y en los oídos le aplicaban. Incluso tengo entendido que el quedó con un problema en el oído por los golpes de corriente. La detención en el momento que lo detuvieron acá, la tortura fue practicada por Carabineros de Chile y cuando fue trasladado a Chillán, por militares el regimiento quedo tan mal esta persona que desapareció de Bulnes. La última vez que vi como 5 años atrás lo vi muy mal quedó con consecuencias.”

Respecto al hecho N° 3 de la resolución que recibió la causa a prueba señaló “si es efectivo, perdió la carrera. Era seguido en la noche en su casa por Carabineros, constantemente eran perseguidos por Carabineros y también por militares. Cuando había una visita de militares, en una oportunidad vino Pinochet fue detenido y llevado al retén a dormir, no se qué pretendían con eso, era una campaña del terror. La relegación en Angol duró un año.”

Respecto al hecho N° 4 de la resolución que recibió la causa a prueba señaló “yo creo que eso no tiene precio. Perdió su carrera, daño físico, estar relegado es muy complejo dar un monto por el daño causado, se entiende que es muy grande. Y todo por pensar diferente.” Repreguntado “hace como 5 años atrás lo visité y estuvimos conversando, lo noté que está muy mal, lo vi muy nervioso, muy alterado, incluso pasó un furgón de Carabineros y él reaccionó muy mal con una expresión de terror miedo, temblaba mucho, mal el sistema nervioso, le costaba expresarse. Quedó con un problema en el oído y tiene problemas de comunicación para conversar, no tiene una coordinación normal para expresarse, producto del estado nervioso. Si subsisten, hace como tres años me encontré con la señora y me dijo que estaba mal, iba en aumento todo lo sufrido.”

SEXTO: Que la demandada, acompañó legalmente y sin objeción copia de sentencia dictada en causa Rol 1274-2022 acumulada 1281-2022 por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción.

SÉPTIMO: Que a petición de la demandada se despachó oficio al Instituto de Previsión Social, quien remitió Ord. 4792-12648 en el cual describen las prestaciones que recibe don Juan de Dios Romero Jara de parte del Estado.



Foja: 1

OCTAVO: Que el Fisco de Chile, alega que ha reparado íntegramente el daño que reclama el actor señor Romero, a través de beneficios de diversa índole establecidos en la legislación que individualiza.

El Estado de Chile ha estructurado un programa de beneficios en favor de las personas a quienes se ha reconocido la calidad de víctima de violaciones a los derechos humanos durante el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, para lo cual se han dictado diversas normas como la Ley 19.123 “Crea Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, Establece Pensión de Reparación y Otorga Otros Beneficios en favor de Personas que señala”, Ley 19.980 “Modifica Ley N° 19.123, Ley de Reparación, ampliando o estableciendo beneficios en favor de las personas que indica”, Ley 19.992 “Establece Pensión de Reparación y Otorga Otros Beneficios a Favor de las Personas que indica”, Ley 20.874 “Otorga un Aporte único de Carácter Reparatorio, a las víctimas de Prisión Política y Tortura, reconocidas por el Estado de Chile”.

La lectura de las normas citadas, permite advertir que el Estado ha dispuesto una serie de prestaciones en favor de las personas reconocidas como víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, otorgando pensiones, becas educacionales, acceso a prestaciones de salud, y bonos en dinero, entre otros.

En tal sentido la Ley 19.123 “Creó la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación” en su artículo 2° dispone que entre sus fines se encuentra “1.- Promover la reparación del daño moral de las víctimas a que se refiere el artículo 18 y otorgar la asistencia social y legal que requieran los familiares de éstas para acceder a los beneficios contemplados en esta ley”. Luego en los títulos II, III, IV y V, establece la concesión de una pensión de reparación, beneficios médicos, educacionales y regula la situación de los hijos de las personas reconocidas como víctimas respecto del servicio militar.

Las restantes leyes modifican y amplían algunos de los beneficios a que se refiere la ley 19.123 pero no establecen cambios sustanciales en cuanto al carácter de los mismos.

De tal modo, puede apreciarse que las prestaciones articuladas en beneficio de quienes fueron reconocidos como víctimas de violaciones a los derechos humanos, tienen un carácter asistencial y simbólico, no pudiendo colegir que con ello se ha reparado el daño moral. A lo anterior debe agregarse que, los textos legales que regulan las prestaciones en cuestión disponen su otorgamiento con carácter de generalidad, de lo que puede extraerse que mediante ellos no se proporciona una efectiva e íntegra reparación del daño, al omitir las circunstancias particulares vividas por cada una de las personas que tienen la calidad en mención.



Foja: 1

En tal sentido por lo demás, debe considerarse que la Resolución 60/147 aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas, ratificada por Chile, que establece “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones” regula como uno de sus principios la “Reparación de los daños sufridos”, disponiendo “Una reparación adecuada, efectiva y rápida tiene por finalidad promover la justicia, remediando las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o las violaciones graves del derecho internacional humanitario. La reparación ha de ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido. Conforme a su derecho interno y a sus obligaciones jurídicas internacionales, los Estados concederán reparación a las víctimas por las acciones u omisiones que puedan atribuirse al Estado y constituyan violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o violaciones graves del derecho internacional humanitario. Cuando se determine que una persona física o jurídica u otra entidad está obligada a dar reparación a una víctima, la parte responsable deberá conceder reparación a la víctima o indemnizar al Estado si éste hubiera ya dado reparación a la víctima.”

Conforme a ello, el Derecho Internacional reconoce el derecho de las víctimas de violaciones a los derechos humanos a obtener del victimario o del Estado una reparación proporcional a la gravedad de los actos que le afectaron, lo que reafirma la conclusión indicada en cuanto a que el programa de prestaciones que el Estado de Chile ha puesto a disposición de las personas reconocidas como víctimas de derechos humanos en el período 11 de septiembre de 1973 a 10 de marzo de 1990, no resulta suficiente para comprender que se ha reparado el daño de manera íntegra en el caso particular del señor Romero Jara.

Sobre el alcance de las reparaciones promovidas por el Estado a propósito de hechos como los que afectó el actor, la Excma. Corte Suprema ha señalado “la legislación especial que aduce el Fisco y que solo introduce un régimen de pensiones asistenciales, no contiene incompatibilidad alguna con las indemnizaciones que aquí se persiguen, ni se ha demostrado que haya sido diseñada para cubrir toda merma moral inferida a las víctimas de atentados a los derechos humanos, puesto que se trata de modalidades diferentes de compensación, lo que hace que el hecho que las asuma el Estado no implica la renuncia de una de las partes o la prohibición para que el régimen jurisdiccional declare su procedencia, por los medios que franquea la ley”. (Sentencia de 29 de marzo de 2016, Rol 2289-2015.)

Por último no puede dejar de mencionarse que conforme el artículo 1698 del Código Civil, corresponde probar la extinción de una obligación quien lo alega, en este



Foja: 1

caso, el Fisco de Chile, quien no rindió prueba de un pago íntegro que repare el daño sufrido por el actor.

NOVENO: Que el Fisco de Chile, opone excepción de prescripción de la acción por el trascurso de 4 años, conforme lo dispuesto por el artículo 2332 del Código Civil, o en su defecto, por haberse cumplido el término de 5 años, conforme al artículo 2515 del mismo cuerpo legal.

No hay duda alguna que contabilizado el término de prescripción desde el momento en que el actor recuperó su libertad aproximadamente en junio de 1974 a la fecha en que se notificó la demanda, los términos de prescripción invocados por el demandado se encuentran cumplidos; igualmente ellos deben entenderse plenamente transcurridos si se cuentan desde el 11 de marzo de 1990 oportunidad en que se restableció el régimen de gobierno democrático y las víctimas de violaciones de derechos humanos en el período anterior pudieron hacer efectivos sus derechos.

Sin embargo, conforme lo dispuesto por el inciso 2° del artículo 5 de la Constitución Política “El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”

En tal sentido si bien los términos de prescripción de acciones y derechos se encuentran regulados por el derecho interno, en este caso, por el Código Civil, el Estado chileno ha ratificado diversos instrumentos internacionales anteriores y posteriores a los hechos sufridos por el demandante, que deben ser considerados al momento de analizar la excepción de prescripción.

En tal sentido además debe tenerse presente que la Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados establece en su artículo 27 “El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46.”

La Declaración Universal de Derechos Humanos establece en su artículo 1 “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.”

Luego en el artículo 3 consagra el derecho a la vida, la libertad y la seguridad personal y el artículo 5 establece “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.”



Foja: 1

Por su parte el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 2.3 dispone “3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que:

a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales;”

La Convención Americana de Derechos Humanos señala en su artículo 1 “1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.”

El artículo 63 del mismo texto dispone “1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.”

La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en su artículo 1, entrega una definición de lo que ha de entenderse por tortura, señalando “A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término "tortura" todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas.”

En consonancia con ello el artículo 14 dispone “1. Todo Estado Parte velará por que su legislación garantice a la víctima de un acto de tortura la reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para su



Foja: 1

rehabilitación lo más completa posible. En caso de muerte de la víctima como resultado de un acto de tortura, las personas a su cargo tendrán derecho a indemnización.

2. Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará a cualquier derecho de la víctima o de otra persona a indemnización que pueda existir con arreglo a las leyes nacionales.”

Los distintos tratados citados conforman un estatuto internacional de protección de los Derechos Humanos, que obligan a los Estados parte, entre ellos Chile, a facilitar los medios para que aquellos a quienes les sean conculcados puedan obtener una amplia protección que incluye la obtención de indemnizaciones reparatorias, prerrogativas que no pueden entenderse limitadas por el derecho interno, por cuanto se trata de acciones que afectan el núcleo esencial de la persona y como tal su tutela no debe verse restringida por reglas de prescripción.

Entre los Principios contenidos en la Resolución 60/ 147 de la Asamblea General de la Organizaciones de Naciones Unidas, se encuentra el IV relativo a la Prescripción, el que señala “. Cuando así se disponga en un tratado aplicable o forma parte de otras obligaciones jurídicas internacionales, no prescribirán las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos ni las violaciones graves del derecho internacional humanitario que constituyan crímenes en virtud del derecho internacional.

7. Las disposiciones nacionales sobre la prescripción de otros tipos de violaciones que no constituyan crímenes en virtud del derecho internacional, incluida la prescripción de las acciones civiles y otros procedimientos, no deberían ser excesivamente restrictivas.”

A lo anterior debe agregarse que la privación de libertad que sufrió don Juan Romero Jara, así como las torturas a que fue sometido se enmarcan en lo que conforme al artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional se entiende como un crimen de lesa humanidad.

Conforme a lo expuesto, dada la naturaleza de los hechos que afectaron al actor, el contexto nacional en que se produjeron, el reconocimiento que el Estado de Chile ha hecho de las violaciones a los derechos humanos ocurridas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, y las obligaciones que ha asumido en diversos Instrumentos Internacionales de respetar los derechos humanos y asegurar el acceso de las víctimas a reclamar la reparación de tales atentados, entre otros mecanismos a través de la indemnización de los daños, no pueden someterse a las reglas de prescripción establecidas en el Código Civil, siendo ella imprescriptible.

Al respecto la Excma. Corte Suprema ha señalado “De este modo, las normas del derecho interno previstas en el Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles



Foja: 1

comunes de indemnización de perjuicios en las que los jueces del fondo asilan su decisión, en el presente caso, no resultan atingentes al estar en contradicción con las reglas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que protegen el derecho de las víctimas a recibir la reparación correspondiente, estatuto normativo internacional que ha sido reconocido por Chile y que, sin perjuicio de la data de su consagración y reconocimiento interno, corresponden a normas de ius cogens, derecho imperativo internacional que protege valores esenciales compartidos por la comunidad internacional que ha debido ser reconocido por los jueces de la instancia al resolver la demanda intentada” (parte final consideración quinta, sentencia de 2 de marzo de 2020, Rol N° 29.167-2019).

DÉCIMO: Que en cuanto a los presupuestos de la acción el demandado Fisco de Chile no controvierte los supuestos fácticos en que el actor funda la responsabilidad que persigue, esto es, haber sufrido privación de libertad desde el 11 de septiembre de 1973 por aproximadamente nueve meses, tiempo en el cual fue golpeado y torturado, y luego de recuperar su libertad relegado a Ángel siendo objeto de persecución e impedido de seguir sus estudios.

A lo anterior debe agregarse que según la nómina de personas reconocidas como víctimas por la Comisión de Prisión Política y Tortura, acompañada por el actor don Juan de Dios Romero Jara fue reconocido por ella bajo el N° 21.563.

Al respecto debe tenerse presente que el artículo 1 del Decreto Supremo N° 1040 del año 2003, del Ministerio del Interior, estableció “Créase, como un órgano asesor del Presidente de la República, una Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, en adelante, La Comisión, que tendrá por objeto exclusivo determinar, de acuerdo a los antecedentes que se presenten, quiénes son las personas que sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas, por actos de agentes del Estado o de personas a su servicio, en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.”

Constando que don Juan Romero Jara presentó ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura los antecedentes que igualmente motivan la acción de autos, y que el organismo mencionado reconoció su calidad de víctima de violaciones a los derechos humanos y tortura, no puede sino darse valor de plena prueba al reconocimiento que efectúa la Comisión, por cuanto se trata de la entidad a quien el Estado comisionó para el estudio de tales antecedentes, quien luego del proceso de rigor, concluyó la efectividad de los hechos alegados por el señor Romero.

Conforme a ello con el mérito de la declaración efectuada por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, y el tácito reconocimiento del demandado, se tendrá por establecida la privación de libertad del señor Romero por nueve meses



Foja: 1

aproximados desde el 11 de septiembre de 1973, el hecho que fue torturado, y luego relegado, y perseguido no pudiendo retomar sus estudios universitarios.

El artículo 38 de la Constitución Política en su inciso 2° dispone “Cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere afectar al funcionario que hubiere causado el daño.”

Conforme al artículo 63 de la Convención Americana de Derechos Humanos y principio IX de la Resolución 60/ 147 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, las víctimas de violaciones de los derechos tiene derecho a una indemnización proporcional a la gravedad de los hechos sufridos y las circunstancias del caso.

Igualmente debe considerarse que según el artículo 2314 el Código Civil, el que ha infligido daño a otro es obligado a la indemnización.

Acorde a lo anterior, y estando acreditado en autos que el actor padeció privación total de libertad por nueve meses, tiempo durante el cual fue sometido a torturas y malos tratamientos físicos y psicológicos, luego relegado, perseguido y truncada su educación, fluye naturalmente que aquellas circunstancias provocaron un daño a su esfera emocional, manifestado en la trasgresión de su dignidad, la aflicción mental por el hecho de ser privado de libertad, el dolor físico por los golpes y otras vejaciones, el distanciamiento de su grupo familiar y la conciencia de la preocupación y dolor de aquellos por su situación personal, la frustración de su expectativa de cursar una carrera profesional y por supuesto el peso de arrastrar por el resto de su vida un recuerdo amargo y doloroso.

Por lo anterior y atendida la extensión del daño, se regulará prudencialmente la indemnización por daño moral que deberá pagar al actor en \$ 80.000.000 (ochenta millones de pesos)

DÉCIMO PRIMERO: Que las sumas cuyo pago se ordenará deberán pagarse reajustadas acorde a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor y devengarán interés corriente a partir de la fecha en que el fallo quede ejecutoriado, por cuanto sólo desde allí se encontrará firme la obligación declarada.

DÉCIMO SEGUNDO: Que el resto de la prueba rendida no altera las conclusiones alcanzadas.

Atendido lo expuesto y lo dispuesto por los artículos 5, y 38 de la Constitución Política, Convención Americana de Derechos Humanos, Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto de Derechos Civiles y Políticos, Convención contra la



Foja: 1

Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, Artículos 2314 y siguientes del Código Civil, Ley 19.123, ley 19.980, Ley 19.992, Ley 20.874, Decreto Supremo 1040 del Ministerio del Interior, artículos 254 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y demás normas citadas y pertinentes se resuelve:

I.- Que se **rechazan** las excepciones de reparación integral y prescripción opuestas por el demandado.

II.- Que se **acoge** la demanda de indemnización de perjuicios interpuesta por don Juan Pablo Gallardo Parada, abogado, en representación de don Juan de Dios Romero Jara, en contra de Estado de Chile representado por el Consejo de Defensa del Estado, y en consecuencia se condena al demandado al pago de indemnización por daño moral ascendente a \$ 80.000.000 (ochenta millones de pesos), suma que deberá reajustarse conforme a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor y devengara interés corriente, ambos desde la fecha en que la sentencia se encuentre firme y ejecutoriada y hasta el efectivo pago.

III.- Que no se condena al Fisco de Chile al pago de las costas por tener motivo plausible para litigar.

Notifíquese, regístrese y archívese.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Chillán, dieciséis de Agosto de dos mil veintitrés.**



